

Sí, a la Constitución; no, a la Junta Democrática Económica

TODAS las principales fuerzas político-sociales del país coinciden en la necesidad de elaborar una Constitución democrática. La sesión de ayer de las Cortes mostró que hasta la coalición reacciona a esta tesis, durante la campaña electoral, se inclina hoy por la conveniencia de redactar nuevas reglas de juego democráticas entre todos y para todos.

En las primeras intervenciones de los líderes de los grupos parlamentarios apuntaban asimismo coincidencias generales sobre los criterios que deben orientar los principios constitucionales. La forma de Estado, las relaciones entre la Iglesia y el Estado; el papel de las Fuerzas Armadas, el problema de las autonomías de las nacionalidades, las relaciones entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, son abordadas idénticamente por los cinco partidos políticos que han obtenido algunos o muchos escaños el pasado 15 de junio. Las matizaciones aparecen sólo en la forma, el lenguaje o la oportunidad o no del momento a elegir. La misma controversia sobre el Consejo del Reino no enfrentaba a partidarios y a adversarios de la existencia de este desfasado organismo, sino a los que querían liquidarlo ahora o dentro de un trimestre.

Pero esta unanimidad constitucional empieza a ser matizada a la hora de tocar el telón de fondo del proceso constituyente. Aquí la división entre los criterios de la derecha y de la izquierda reaparecen al abordar desde distintos ángulos el tema del plan de estabilización. Aunque fundamentalmente se trata de posturas previas al inicio de una negociación que todos proclaman necesaria, urgente e imprescindible. Unos y otros desvelan sus puntos de vista que desean incorporar a un proyecto que esencialmente todavía es una incógnita. No hay nadie que desee romper la baraja económica en crisis que tenemos entre las manos. Únicamente se discute la proporción de hombre que cada clase social tiene que arrimar.

Donde quiebra unilateralmente esta unanimidad es en la propuesta de don Santiago Carrillo, aprovechando la crisis económica, sobre la necesidad de crear un Gobierno de concentración democrática nacional, necesidad que no ven ninguno de los restantes partidos de izquierda o derecha, que ni siquiera aludieron a ella. De hecho, la totalidad de las fuerzas político-sociales coinciden con los criterios que apuntaba INFORMACIONES en su editorial de hace dos días. Porque al contrario de quienes creen que tal proposición es una muestra de realismo de este veterano líder político, seguimos pensando, por el contrario, que es índice de un realismo todavía insuficiente. Es evidente que desde que aparece en Madrid, en diciembre último, este hombre público ha superado la visión irrealista, triunfalista y voluntarista que le caracterizó durante casi todo el proceso de transición política, pero no lo es menos que el proceso realista no lo ha recorrido del todo.

Ello es lo que explica que ahora intente resucitar el cadáver de la Junta Democrática Económica. La sociedad española necesita claramente una política gubernamental y una política de oposición que negocien una estrategia común coyuntural, no un «pot pourri» de ideologías, tácticas, estrategias, programas, que agravaría la salida de la crisis. Frente al alarmismo de tipo inmovilista, bien intenso estos días, existe un alarmismo «juntero» que pretende insensatamente imponer el continuismo o el rupturismo, que no pudieron lograr en el terreno político, por la vía económica. Baste decir, en espera de profundizar en este tema si fuese necesario, que las consecuencias de tal hipótesis inviable serían trágicas, tanto en la esfera económica como en la política.

Hace unos días insistíamos en la necesidad de recuperar el espíritu negociador que caracterizó la salida política. Ahora insistimos en la necesidad de mantener una visión realista de la situación político-económica. Ni la derecha, ni mucho menos la izquierda, están interesadas en agudizar un grave panorama con opciones particulares que tienden ilusamente a imponer una política fracasada, explotando las tensiones normales económicas de un plan de estabilización.